

aun cuando las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia en casos como el presente deben citarse como ejecutorias, si deben servir de base para la jurisprudencia.

Por tales consideraciones, atento lo pedido por la parte fiscal y en apoyo de la ley de 20 de Enero de 1869, se declara: que la Justicia de la Union ampara y protege al C. Sebastian Corona, contra el acto en virtud del cual se le retiene de una manera forzosa en el servicio militar, por violarse con esto en su persona, las garantías que otorgan los artículos 4º y 5º constitucionales.

Hágase saber; remítase copia de este fallo al Diario Oficial y Semanario Judicial, y previa citación fiscal, elévense estos autos á la Suprema Corte de Justicia para su revision. Lo decretó y firmó el C. Juez 2º de Distrito Lic. José María Canalizo. Doy fe.—*José María Canalizo.*—*Manuel M. de Chavero*, secretario.

Es copia. México, Junio 11 de 1873.—*Manuel M. de Chavero*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Junio 23 de 1873. Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado 2º de esta Capital por Sebastian Corona, contra la comandancia militar del Distrito, que lo consignó al servicio de las armas, y considerando: que en el expediente aparece que se ha vulnerado en la persona del quejoso la garantía á que se refieren los artículos 4º y 5º de Constitucion federal, se decreta: que se confirma la sentencia pronunciada respecto de este juicio el 6 del actual por el Juzgado 2º de Distrito de esta Ciudad, que declara: que la Justicia de la Union ampara y protege al C. Sebastian Corona, contra el acto en virtud del cual se le retiene de una manera forzada en el servicio militar, por violarse con esto en su persona las garantías que otorgan los

artículos 4º y 5º de la Constitucion. Devuélvase sus actuaciones al Juzgado de que proceden, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos, y archívese á su vez el Toca. Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José M. Lozano.*—*José Artaga.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*L. Velasquez.*—*José García Ramirez.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Agosto 13 de 1873.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Querétaro por D. Timoteo Fernandez de Jáuregui é hijos y D. Federico Cacina por D. Juan G. García, contra los decretos número 172 y 178 expedidos por la legislatura del Estado en 30 de Diciembre de 1872, por violacion de garantías,

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que los CC. Próspero C. Vega y Federico de Cacina, el primero en representacion de D. Timoteo Fernandez de Jáuregui y sus hijos D. José, D. Isidoro y Doña Dolores; y el segundo por D. Juan Gutierrez García, solicitan ser amparados contra los decretos número 172 y 178 expedidos por la legislatura del Estado, con fecha 30 de Diciembre de 1872, en los que se imponen varias contribuciones,

Consideran violado el artículo 16 de la Constitución, por carecer ese Cuerpo del carácter de autoridad.

De las pruebas rendidas, aparece: primero, que el actual Congreso se instaló con siete diputados, entre los que figuran D. Jesus Córdova y D. Ramon Quezada, por el Distrito de Amealco. Segundo, que en el anterior Congreso figuraron también por Amealco, D. Juan N. Rubio y D. Eleuterio Frias.

Los artículos 35 y 36 de la Constitución del Estado, dicen: "Artículo 35. Cada Distrito nombrará los diputados que le correspondan por su población, según la base prefijada: si resultare una fracción que exceda ó llegue á la mitad de dicha base, nombrará otro diputado." "Los Distritos alternarán en el uso de la facultad que se les concede en la segunda parte del artículo anterior, siempre que por las fracciones resulte mayor número de diputados que el que señala el artículo 31, después de aumentada la base como previene el artículo 33. También alternarán los Distritos en el nombramiento de diputados, si por las fracciones resultare mayor ó menor número de estos del que corresponda á la población total." De aquí deducen los quejosos, que el nombramiento de los diputados para el presente Congreso no podía haberse repetido por el mismo Distrito; y así es que ese cuerpo se instaló sin *quorum*.

Para deferir á su pretension se necesita previamente declarar nula la eleccion de los CC. Córdova y Quezada, diputados por el Distrito de Amealco; volviendo el Juzgado á resolver una cuestion ya decidida por la única autoridad competente.

La cosa juzgada es uno de los principios eminentemente conservadores del orden social. Entre los romanos, se habia adoptado esta máxima que ha pasado á todas las legislaciones: *res judicata pro veritate habetur*. El respeto de la cosa juzgada es la verdadera base de toda organizacion judicial, y nuestra legislacion supone siempre

la existencia de este principio, aun cuando conceda el recurso de nulidad, por haberse faltado á las leyes que arreglan el procedimiento.

Esos mismos principios, estas mismas consideraciones y estos mismos argumentos, que tienen su aplicacion entre tribunales de un mismo orden, obran en toda su eficacia para mantener la fuerza de la cosa juzgada por la autoridad legislativa, respecto de la autoridad judicial, y recíprocamente la cosa juzgada por esta, respecto de aquella; pues de otra manera no habria ya límites entre las dos autoridades, ni independencia de la una respecto de la otra.

Y que la legislatura ha juzgado dentro de los límites de su competencia la cuestion relativa á la eleccion de los diputados de Amealco, nos lo está diciendo muy claramente el art. 4º de la Constitución del Estado, con las siguientes palabras: "El congreso es el único que puede calificar las elecciones de sus miembros y resolver las dudas que ocurran sobre ellas." Cuyo precepto es idéntico al del art. 60 la Constitución federal. "El Congreso califica las elecciones de sus miembros y resuelve las dudas que ocurran sobre ellas." Bajo este supuesto, ninguna dificultad puede suscitarse sobre la cosa juzgada por una autoridad que ha obrado dentro de los límites incontestables de su competencia.

Ademas, el Juzgado se arrogaría una funcion propia del legislativo, si resolviere la cuestion en el sentido que pretenden los quejosos; traspasando así los límites de su jurisdiccion. Y si es cierto que el principio que confiere á la cosa juzgada por autoridad competente, un efecto legal indestructible, debe ser respetado; en la misma condicion se encuentra el que establece la distribucion de los poderes, y asigna límites á sus respectivas jurisdicciones. Este es un principio conquistado para la ciencia y consignado expresamente en el art. 50 de la Carta fundamental: "El Supremo poder de la federacion se divide para su ejercicio

en legislativo, ejecutivo y judicial. Nunca podran reunirse dos ó mas de esos poderes en una persona ó corporacion, ni depositarse el legislativo en un individuo.»

Montesquieu y Delolme encuentran que la division de las funciones del poder es, en la Constitucion inglesa, una de las garantías mas positivas de la duracion de las libertades Británicas. En efecto, esta Constitucion consagra la division de las funciones del poder en tres departamentos: legislativo, ejecutivo y judicial; pues aunque el juez Blachstone dice en el cap. 2º del lib. 1º de sus Comentarios, que “en Inglaterra el poder supremo se ha dividido en dos ramas, una legislativa compuesta del rey, de los lores y de los comunes, ó sea el parlamento; y la otra ejecutiva que reside en el rey solamente.” Posteriormente dice lo que sigue: “Otro carácter bajo el cual es considerado el rey en los negocios interiores, es el de dispensador general de la justicia y conservador general de la paz. La ley, al designarlo como el dispensador de la justicia, no entiende que el sea su *autor ó principio*, sino únicamente el distribuidor. La justicia no se deriva del rey como un don suyo; él es solamente el mayordomo del pueblo para impartirla á quien es debido. No es la fuente, sino el depósito de donde el derecho y la equidad son conducidos por mil canales á cada individuo. El poder judicial, reside en el cuerpo entero de la sociedad, por los principios fundamentales de ella misma; pero como sería imposible que á cada individuo se le hiciese justicia por el pueblo en su capacidad colectiva, por esto cada nacion ha sometido este poder á ciertos magistrados escogidos, que con mas facilidad y expedicion pueden oír y determinar las controversias. “Es probable, y casi cierto, que en tiempos muy atrasados, antes de que nuestra Constitucion hubiera llegado á su entera perfeccion, nuestros reyes en persona oyesen y jurasen las causas de los particulares; pero ahora, segun la larga y uniforme costumbre de muchos

TOMO IV.—PARTE II.

siglos, el poder judicial de nuestros reyes está completamente abandonado por ellos á los jueces de las diversas cortes de justicia que son los grandes depositarios de las leyes fundamentales; y han así adquirido una jurisdiccion fija y determinada, que la corona misma no podria cambiar sino por una acta del Parlamento. Ahora estas leyes se encuentran mejoradas por un estatuto liberal, en que se considera la *independencia é integridad de los jueces, como esenciales á la administracion imperial de la justicia*, como una de las mejores garantías de los ciudadanos; y como muy importante al honor y mejor despacho del gobierno.» (Blachstone. Comentarios. lib. 1º cap. 7º.)

En los Estados Unidos previene la Constitucion, que todas las facultades legislativas que por la misma se conceden, residirán en un congreso, el cual se compondrá de un Senado y de una Cámara de representantes (art. 1º sec. 2º) Previene igualmente, que el poder ejecutivo resida en un presidente de los Estados Unidos de América (art. 2º sec. 1º) Y por último, que el poder judicial resida en una Corte Suprema y en aquellos tribunales inferiores que mas adelante disponga y establezca el congreso, (art. 3.º sec. 1º)

Recientemente los publicistas americanos han empesado tambien á inclinar el departamento electoral en division que hacen de las funciones del poder. Creo, por lo dicho, dice un autor moderno, que la division en los cuatro departamentos, electoral, legislativo, ejecutivo y judicial, es la mas propia; porque está fundada en las distintas manifestaciones que el pueblo puede hacer de su soberanía, que son elegir, legislar, ejecutar y juzgar. (Gonzalez lecciones de Derecho constitucional cap. 10). Y este sistema ha sido adoptado en la Constitucion del Estado de Querétaro, cuyo art. 22, es como sigue: “El Poder Supremo del Estado se divide para su ejercicio en electoral, legislativo, ejecutivo y judicial. El poder electoral se ejerce por los colegios electorales

nombrados directamente por el pueblo. El legislativo se deposita en una asamblea que se denominará Congreso del Estado. El ejecutivo, en un solo individuo que se denominará Gobernador del Estado. El judicial, es un Tribunal Superior de justicia, y demás juzgados que establecen esta Constitución.» Y así es que si bien se reflexiona, se reclama, en el caso presente, el acto del colegio electoral del Distrito de Amcalco, “independiente y soberano al ejercer sus atribuciones» conforme á las leyes. (Art. 26 de la Constitución de Querétaro.)

Por todo lo que el Promotor fiscal pide se niegue el amparo solicitado.

Querétaro, 3 de Marzo de 1873.—*L. Castañeda.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Querétaro, Marzo 28 de 1873.—Visto el presente juicio de amparo promovido por los CC. Lic. Próspero C. Vega, como apoderado de D. Timoteo Fernandez de Jáuregui é hijos, y por D. Federico Casina, que lo es de D. Juan G. García; los fundamentos del escrito de queja; el auto de suspensión que está á fojas 14 de este expediente; el informe con justificación rendido por la autoridad ejecutora; lo que pidió el Promotor al evacuar el traslado que de ese informe se le corrió, y cuyo pedimento aparece á fojas 40; las pruebas rendidas; los alegatos del actor y fiscal; la comunicación que al Juzgado dirigieron los Diputados Secretarios de la Legislatura de este Estado que se vé á fojas , en la que consta, que esa Legislatura se negó á remitir los documentos que se le pidieron; la citación para sentencia, y todo lo demás que debía verse.

Considerando: que el actor en su escrito de queja, hace deducir la incompetencia de la Legislatura para legislar, en la ilegitimidad con que se instaló, aplicando esa incompetencia á la garantía contenida en el artículo 16 de la Constitución general de la

República, el cual señala como violado en su persona y bienes con los decretos 172 y 178, que establecen varias contribuciones que se le exigen por autoridad incompetente.

Considerando: que no es posible decidir esa controversia, sin investigar si existe ó nó la ilegalidad objetada de donde emana la incompetencia, cuya investigación no debe estimarse aunque recaiga sobre autoridades de un Estado, como un ataque á su Soberanía; porque sin esa investigación no sería posible decidir la cuestión, cuando el fin de ese artículo 16 y del 101 de la Constitución citada, es proteger al individuo débil de las agresiones del fuerte que ejerce autoridad en cualquiera manera, y ese fin á objeto en vigor de justicia, no puede quedar ilusorio y burlada la garantía, porque se trate de ver si en la autoridad de un Estado existe la ilegalidad que la reduce á incompetente.

Considerando: que la competencia de cualquiera autoridad constituida, no procede del hecho solo y sencillo de quienes se constituyen en tal autoridad; sino de la ley que solo la trasmite á los que ella misma eleva á tal rango y jamás al que lo usurpa. Y esto es lo que se debe examinar.

Considerando: que la parte que impetra este amparo, se funda en el principio que se acaba de asentar, pues que la incompetencia que alega, no es la de traslimitación de la competencia que dá la ley á toda autoridad legítima, sino de nó haberse transferido ninguna á la Legislatura y Ejecutivo de este Estado, porque solo de hecho ejercen autoridad. De donde se sigue, que serán absolutamente incompetentes para todo, una vez probada su ilegalidad.

Considerando: que esto último aparece en efecto probado en este juicio con el testimonio de siete testigos, que afirman haberse instalado la Legislatura con menos de la mitad del número de Diputados de que se compone, siendo así que el art. 41 de la Constitución particular del mismo Estado dice: “El congreso no puede abrir sus sesiones

ni ejercer su encargo sin la concurrencia de mas de la mitad del número total de sus miembros, mientras que ni la autoridad Ejecutora al informar emitió dato en contrario, y la legislatura se negó á remitir los documentos que se le pidieron, por cuya razon nada destruye lo probado por el actor.

Considerando: que lo expuesto por el C. Promotor en su alegato sobre ser necesario calificar las elecciones de los Diputados de Amealco, lo que no puede hacer el Juzgado por estar reservada esa calificación al Congreso del Estado, segun el art. 40 de su Constitucion particular; no es aplicable al presente caso, porque no se trata de declarar ó calificar tales elecciones ó alguna duda que ocurriera sobre ellas, que es á lo que se refiere tal art., sino á poner en claro si ese Distrito debió elegir un solo diputado conforme á su poblacion, y si al elegir á dos se infringió el 36 de la misma Constitucion que manda, que los Distritos alternen en el derecho de elegir un diputado mas de lo que le correspondan á su poblacion, y si habiendo electo Amealco en el anterior periodo esos dos Diputados, en uso de ese derecho pudo elegir dos en el actual, barrenando y evidentemente conculcando el repetido art. 36, que es cuestion muy diversa de la de calificar elecciones.

Considerando por último: que de no tomarse en cuenta todas las anteriores razones, quedaria sin objeto el art. 1º de la tantas veces repetida Constitucion general, y destruida en su base el objeto de las instituciones, que como ese mismo art. declara, no es otro que el de asegurar los derechos del hombre. Por tales fundamentos y por los que ministran el mismo art. 1º que se acaba de citar, 16 y 101 de la misma Constitucion federal, en uso de las facultades que concede el art. 1º de la ley de 20 de Enero de 1869, fallo: que debía declararse y se declara, que la justicia federal ampara y protege á los CC. Juan G. García y Timoteo Fernandez de Jáuregui é hijos, contra los decretos números 172 y 179 de 30 de Di-

ciembre de 1872, expedidos por la Legislatura del Estado de Querétaro. Notifíquese á las partes; provengase á la actora reponga el papel comun de que se ha usado por no demorar la secuela de este expediente, con sellado que corresponde; sáquense las copias de esta sentencia para el "Semanario Judicial" y "Diario del Gobierno" y elévese este expediente á la Suprema Corte de Justicia de la Nacion. Así definitivamente juzgando lo pronunció, mandó y firmó el C. Juez de Distrito primer Suplente Lic. Mariano Pimentel. — Doy fé. — *Mariano Pimentel.* — *Francisco Ruiz.* — Secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia

México, Junio 13 de 1873.—Visto este juicio de amparo promovido ante el juzgado de Distrito de Querétaro por el C. Lic. Próspero Vega, en representacion de D. Timoteo Fernandez de Jáuregui é hijos, y por D. Federico Casina en representacion de D. Juan G. García, contra los decretos núm. 172 y 178 de 30 de Diciembre de 1872, expedidos por la Legislatura de Querétaro, por creer violada con ellos la garantía á que se refiere el artículo 16 de la Constitucion federal, en virtud de que esos decretos fueron expedidos por el Gobernador y por la Legislatura del Estado de Querétaro que no ejercen autoridad legítima; y considerando: que los quejosos alegan como causas de ilegitimidad respecto de la Legislatura, que se instaló sin que hubiera el número de diputados necesario para formar *quorum*; y respecto del Gobernador, que el C. Julio M. Cervantes fué declarado Gobernador contra lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitucion del Estado que prohíbe la reeleccion, y que á este punto debe limitarse la resolucion del amparo solicitado; que la Legislatura se instaló con siete diputados, número que forma el *quorum*

de ella; que si en las elecciones de diputados por el Distrito de Amealco hubo vicios, contando que realmente fueron electos por tal Distrito, solo á la Legislatura del Estado toca, como cuerpo electoral, calificar y apreciar estos vicios; que si al hacerse la declaracion de Gobernador la Legislatura infringió el artículo 77 de la Constitucion del Estado, esta infraccion por si sola no puede ser objeto de amparo de garantías, sino de apreciacion de la misma Legislatura como cuerpo electoral. Por todas estas consideraciones, y de acuerdo con lo prevenido en el artículo 1º de la ley de 20 de Enero de 1869, se declara: 1º; que es de revocarse y se revoca la sentencia del Juez de Distrito de Querétaro, que amparó á los quejosos. 2º: la Justicia de la Union no ampara ni protege á los CC. Juan G. García y Timoteo Fernandez de Jáuregui é hijos, contra los decretos núm. 172 y 173 de 30 de Diciembre de 1872, expedidos por la Legislatura de Querétaro.—Devuélvanse las actuaciones al juzgado de su origen con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.—Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.—Pedro Ogaszon.—Juan S. de la Garza.—José María Lozano.—José M. Arteaga.—P. Ordaz.—Ignacio Ramirez.—M. de Castañeda y Nájera.—J. M. del Castillo Velasco.—Simon Guzman.—José García Ramirez.—Luis María Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Julio 28 de 1873.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

De garantías promovido ante el Juzgado de Distrito de Durango por Octaviano Monreal en representacion de su hijo Marcelino, contra el C. Jefe político de San Juan del Rio, que juzgó á este como reo de robo con asalto y lo condenó á muerte.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El que lleva la voz fiscal en estos autos sobre recurso de amparo que ha promovido Octaviano Monreal, en virtud de creer violada la garantía que concede al hombre el artículo 13 de la Constitucion federal, dice: que sin entrar en los méritos intrínsecos de la causa que en copia ha acompañado el C. Jefe político de San Juan del Rio en su informe rendido al Juzgado, aparece de la prueba que ha producido el padre del reo, por el testimonio de los testigos Porfirio Rodriguez Victorio y Modesto Alvarado, que hallándose dicho reo en esta Ciudad el 26 de Octubre último y los dias que se sucedieron del mismo mes, no puede ser juzgado por la ley de saltadores que suspende las garantías á que se refiere y acoge, supuesto que el robo de Encina Gorda se perpetró en uno de los dias expresados y que la circunstancia de su aprehension es tan vaga por el modo con que tuvo lugar, que sin tocar el punto de la confesion calificada del reo, no se le puede considerar destituido de la garantía que ha invocado; sin embargo, V. con su ilustrada justificacion se servirá resolver si está Marcelino Monreal en el caso de ser amparado por la Justicia federal. Mayo 6 de 1873.—*Juan Antonio Loeza*.

Es copia. Durango, Mayo 14 de 1873.—*Juan Antonio Loeza*.